

Censura de internet y registros sin orden judicial en Hong Kong

► Entra en vigor la ley de Seguridad Nacional que recorta la libertad de las redes sociales

PABLO M. DÍEZ
CORRESPONSAL
EN PEKÍN



Registros, vigilancias y «pinchazos» telefónicos sin orden judicial, censura de internet, congelación de activos y control de los datos de los usuarios de las redes sociales, incluidos los del extranjero. Estas son las prerrogativas que la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China otorga a la Policía de Hong Kong, aprobadas el lunes por la noche en la primera reunión de la comisión encargada de aplicarla, dirigida por la jefa ejecutiva del Gobierno local, Carrie Lam.

La antigua colonia británica, que era una de las ciudades más libres de Asia, va perdiendo sus privilegios bajo el autoritario régimen del Partido Comunista 23 años después de su devolución. Aunque Pekín se comprometió a mantener hasta 2047 su autonomía y sus libertades bajo la fórmula «Un país, dos sistemas», impuso la semana pasada esta ley para aplastar las violentas protestas que llevan un año reclamando democracia. Con un lenguaje muy vago que prácticamente lo pena todo y deja las condenas a la interpretación de los jueces, dicha legislación castiga con entre tres años de prisión y cadena perpetua la subversión, la secesión, el terrorismo y las injerencias extranjeras.

Tan draconiana ley, que no pasó por el Parlamento autónomo y cuyo contenido no se conoció hasta que fue promulgada casi a medianoche, ha desatado el miedo entre los activistas y partidarios demócratas. Asustados por su dureza, ya que criminaliza hasta llevar una bandera por la independencia, mu-



La Policía advierte con una pancarta que ha entrado en vigor la nueva ley ^{AFP}

chos hongkoneses están borrando sus comentarios políticos de las redes sociales. Aunque la legislación no tiene efecto retroactivo, dichas opiniones del pasado pueden ser usadas como agravante si alguien es detenido en el futuro. Además, está cundiendo el temor a que la Policía pueda espiar las conversaciones telefónicas y mensajes de texto, ahora que dichas prácticas no han de ser autorizadas por un tribunal, sino por la propia jefa del Gobierno local «en

circunstancias especiales» sin especificar. Para evitarlo, los hongkoneses están recurriendo a aplicaciones encriptadas cuyas descargas se disparan en

Lenguaje vago
La ley aplica un lenguaje poco preciso que lo pena todo y deja las condenas en manos de los jueces

los últimos días, como Signal, o a conexiones VPN a servidores extranjeros de internet.

Para las redes sociales y aplicaciones de mensajería y correos electrónicos, la nueva ley también establece la obligación de entregar la información que requiera la Policía. Pero las principales plataformas, como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y Google han puesto en suspenso dicha petición mientras evalúan con más detalle la normativa, incluyendo si supone una violación de la libertad de expresión y los derechos humanos. Por su parte, el servicio de mensajería Telegram, muy usado por los manifestantes para organizar sus protestas, ya ha dicho que no entregará información de sus usuarios a las autoridades. Pero estas compañías tecnológicas se enfrentan a multas de 100.000 dólares de Hong Kong o penas de dos años de cárcel. Incluso pueden ser prohibidas como en China continental, donde están censuradas.

Censura de contenidos

Temíendose lo que está al caer, ha sido precisamente una aplicación china de vídeos, la popular Tiktok, la primera en suspender su servicio en la ciudad. En cambio, si seguirá funcionando su versión china, Douyin, que es en mandarín y sus usuarios se descargan en el continente porque sí cumple con la censura de contenidos políticamente sensibles para el régimen.

Además de por la oposición democrática, el recorte de libertades que trae la nueva ley ha sido denunciado por la Asociación de Periodistas de Hong Kong, que presentó ayer su informe anual. «El estado de la libertad de prensa es el peor que he visto en treinta años», criticó su presidente, Chris Yeung. Buena prueba de ello son las acusaciones de los reporteros contra la Policía de Hong Kong por emplear la violencia para entorpecer su cobertura de las protestas.

Bajo el nuevo clima de miedo y represión que ha desatado la ley, de las librerías y colegios han sido retirados los libros de activistas demócratas como el popular Joshua Wong, la diputada Tanya Chan y el profesor localista Horace Chin. Rápidamente, Hong Kong va pareciéndose cada vez más a China.

ATAQUES AÉREOS EN IDLIB

La ONU acusa a Siria, Rusia y Al Qaida de crímenes de guerra

M. AYESTARAN JERUSALÉN

Las Naciones Unidas denunciaron una vez más «crímenes de guerra» cometidos en Siria contra civiles. El nuevo informe examina 52 casos de «ataques significativos» cometidos en Idlib desde noviembre de 2019 hasta junio de 2020 y señala a la aviación siria y rusa como autora de «bombardeos indiscriminados» contra la población civil en vísperas de la tregua que se alcanzó con Turquía en marzo.

Esas operaciones aéreas se cobraron «cientos de vidas» y obligaron a casi un millón de civiles a huir en busca de refugio a la frontera turca. 47 de los 52 ataques analizados fueron obra de Siria y Rusia, los otros cinco los perpetraron los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), brazo sirio de Al Qaida que controla parte de esta provincia, que disparó artillería a zonas civiles «sin ningún objetivo militar legítimo aparente».

En la presentación de la investigación, Paulo Pinheiro, presidente de la Comisión Internacional de Investigación para Siria, declaró que «lo que queda claro de la campaña militar es que las fuerzas progubernamentales y los terroristas designados por la ONU violaron flagrantemente las leyes de la guerra y los derechos de los civiles sirios». Entre los bombardeos analizados se incluyen los tres ataques del 29 de enero junto a un hospital en la ciudad de Ariha, y Pinheiro aseguró disponer de «motivos razonables» para acusar a las fuerzas leales a Bashar al Assad de «ata-

car deliberadamente al personal y las instalaciones médicas».

Después de nueve años de guerra, Idlib, en plena frontera con Turquía, se

ha convertido en el último gran frente abierto. Este es el lugar al que fueron evacuados los milicianos de los distintos grupos armados de la oposición tras rendirse en lugares como Alepo, Guta o Daraa. Se estima que unos 70.000 combatientes, de ellos unos

10.000 miembros del brazo sirio de Al Qaida, están operativos y muchos de ellos combaten junto a las fuerzas regulares de Turquía

Informe
47 de los 52
ataques
analizados fueron
obra de Moscú y
Damasco, los otros
5 de yihadistas